



Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

RADICACIÓN: 11001-33-35-010-2021-00088-00
DEMANDANTE: GLADYS MIREYA PARDO MORALES
DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Estando el expediente al Despacho para resolver lo que en derecho corresponda, es procedente decidir previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Del escrito de demanda se observa que lo pretendido por la parte actora es que se declare la nulidad del fallo de primera y segunda instancia proferidos por la Secretaría General – Control Interno Disciplinario y el Director General del Instituto Nacional para Ciegos – INCI el 27 de julio de 2020 y 04 de agosto del mismo año en cita, respectivamente, a través de los cuales se impuso una sanción disciplinaria de suspensión del cargo a la demandante por el término de doce (12) meses; siendo ejecutada por medio de la Resolución No. 20201110000793 del 5 de agosto de 2020 y notificada el mismo día tal como consta a folios 123 y 124 del expediente digital.

Así entonces, de conformidad con lo previsto **por numeral 2 literal d) del artículo 164 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según fuere el caso.

Por su parte, el inciso 7º del artículo 118 del Código General del Proceso, establece que cuando el término sea de meses o de años su vencimiento será el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año, e indica que si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

Teniendo en cuenta que los actos administrativos demandados quedaron debidamente notificados el día 5 de agosto de 2020, se tiene que el término de caducidad comenzó a correr el día **6 de agosto de 2020** y vencía el día **6 de diciembre de 2020**.

Igualmente, a la luz de lo establecido por el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, reglamentario del artículo 13 de la Ley 1285 del mismo año, el término de caducidad se suspende con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público y sus efectos cesarán una vez se logre el acuerdo conciliatorio, o se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001 o hasta que venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero.

En sub lite, el Despacho encuentra que el demandante en aras de dar cumplimiento al requisito establecido por la referida Ley 1285 de 2009, según constancia de conciliación allegada al expediente, elevó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio público “Procuraduría 139 Judicial II Para Asuntos Administrativos”, el día 17 de septiembre de 2020, por lo que de conformidad con la norma antes señalada, se produjo la suspensión del término de caducidad (4 meses), el cual venía



transcurriendo desde el día 6 de agosto de 2020, faltando así dos (2) meses y diecinueve (19) días para su cumplimiento.

Ahora bien, la conciliación prejudicial fue declarada fallida el día 11 de diciembre de 2020 (fls. 43 y 44), desapareciendo con ello, la causa que originó la suspensión, rehabilitándose de esta manera el término de caducidad (4 meses) de que trata el artículo 164 C.P.A.C.A, circunstancia por la cual el interesado, estaba compelido para acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa dentro del tiempo que le restaba, esto es dos (2) meses y diecinueve (19) días, es decir hasta el 2 de marzo de 2020.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda en curso fue radicada el 6 de abril de 2021, para el Juzgado es evidente que el ejercicio de dicha acción se hizo extemporáneamente, es decir, por fuera de los 4 meses dispuestos para ello, operando por ende la CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, en consecuencia la demanda deberá ser rechazada de plano, por expresa disposición del inciso 1º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE:

PRIMERO: RECHAZAR de plano el MEDIO DE CONTROL de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, instaurado por **GLADYS MIREYA PARDO MORALES** en contra del **INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI** por haber caducado la acción, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución de los anexos aportados por la parte actora sin necesidad de desglose y el archivo de las restantes actuaciones, previo los registros correspondientes.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a **WILSON SUÁREZ PEDRAZA** con cédula de ciudadanía No. **91.284.719** expedida en Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 152.630 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado judicial de **GLADYS MIREYA PARDO MORALES** en los términos y para los efectos del mandato obrante en el expediente.

CUARTO: Por la Secretaría descárguese el inventario del juzgado el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GIOVANNI HUMBERTO LEGRO MACHADO
JUEZ (E)